

Memoria y juvenicidio en el estallido social de Colombia (2021)

Nicolás Aguilar-Forero, Ph. D.^a

Universidad de los Andes, Colombia



nj.aguilar1902@uniandes.edu.co

Resumen (analítico)

¿Cómo se relacionaron la memoria y el juvenicidio en el contexto del paro nacional de 2021 en Colombia? El presente artículo responde esta pregunta por medio de un estudio que combinó el activismo en las calles con el análisis de los registros que los jóvenes dejaron en la red. Se participó en varias de las jornadas del paro nacional en Bogotá y se analizaron las publicaciones que, entre el 28 de abril y el 2 de junio de 2021, realizó el colectivo Escudos Azules en Twitter. Los resultados evidencian que la memoria y el juvenicidio convergieron en un conjunto de acciones colectivas en las que, a través de distintos ejercicios de memoria, los jóvenes confrontaron el juvenicidio sistemático mediante el cual se han eliminado, criminalizado y estigmatizado sus prácticas políticas.

Palabras clave

Memoria; participación juvenil; violencia; juvenicidio; Colombia.

Tesaurus

Tesaurus de Ciencias Sociales de la Unesco.

Para citar este artículo

Aguilar-Forero, N. (2022). Memoria y juvenicidio en el estallido social de Colombia (2021). *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 20(3), 1-25.

<https://dx.doi.org/10.11600/rllcsnj.20.3.5492>

Historial

Recibido: 26.04.2022

Aceptado: 12.08.2022

Publicado: 31.08.2022

Información artículo

El presente artículo es producto de un estudio independiente adelantado por el autor desde noviembre de 2019, titulado *Jóvenes, poderes y grietas de esperanza*. Como parte de este estudio se han analizado varios de los episodios recientes de la acción colectiva juvenil en Colombia, entre estos el estallido social de 2021 que se aborda en este texto. **Área:** ciencias sociales. **Subárea:** interdisciplinaria/antropología.



Memory and youthicide in the national strike of Colombia (2021)

Abstract (analytical)

How were memory and youthicide related in the context of the 2021 national Strike in Colombia? This article answers this question through a study that combined activism in the streets with an analysis of social media content posted by young people. The author participated in several moments of the protests held in the city of Bogotá and analyzed the social media posts made by the *Escudos Azules* (Blue Shields) youth collective between April 28 and June 2, 2021 on Twitter. The results show that memory and youthicide converged in a set of collective actions. Through different memory exercises, the young people addressed the systematic youthicide through which their political practices have been eliminated, criminalized and stigmatized.

Keywords

Memory; youth participation; violence; youthicide; Colombia.

Memória e juvenicídio na greve nacional na Colômbia (2021)

Resumo (analítico)

¿Como se relacionaram memória e juvenicídio no contexto da greve nacional de 2021 na Colômbia? Este artigo responde a essa questão por meio de um estudo que combinou o ativismo nas ruas com a análise dos registros que os jovens deixaram na rede. Em particular, o autor participou de várias jornadas nacionais de greve na cidade de Bogotá e analisou as publicações que, entre 28 de abril e 2 de junho de 2021, foram feitas pelo coletivo juvenil Escudos Azules no Twitter. Os resultados mostram que a memória e o juvenicídio convergiram em um conjunto de ações coletivas em que, por meio de diferentes exercícios de memória, os jovens enfrentaram o juvenicídio sistemático através do qual suas práticas foram eliminadas, criminalizadas e estigmatizadas.

Palavras-chave

Memória; participação juvenil; violência; juvenicídio; Colômbia.

Información autor

[a] Antropólogo y Profesional de Lenguajes y Estudios Socioculturales, Universidad de Los Andes. Magíster en Estudios Culturales, Universidad Javeriana. Doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Cinde-Universidad de Manizales.  0000-0002-9181-0281. H5: 9. Correo electrónico: nj.aguilar1902@uniandes.edu.co

Introducción

El 28 de abril de 2021, una propuesta gubernamental de reforma tributaria desató un estallido social de grandes magnitudes en Colombia. Pese a la pandemia (utilizada por los gobiernos para desocupar el espacio público, profundizar la vigilancia policial y legitimar la limitación de derechos) las pulsiones rebeldes en distintas ciudades del país, haciendo eco de los estallidos sociales de los últimos años en América Latina y el mundo (Amador-Baquiro & Muñoz-González, 2021; Feixa, 2021; Rivera-Aguilera *et al.*, 2021), lograron impugnar las gramáticas de los poderes instituidos (Richard, 2021). El estallido social se prolongó por varios meses y su energía desobediente ejerció tal presión que la reforma tributaria terminó por ser retirada por el Gobierno de Iván Duque; al mismo tiempo, el ministro de Hacienda renunció a su cargo y el ministerio de Educación tuvo que acoger la matrícula cero (gratuidad) para la educación superior de los jóvenes más desfavorecidos, elemento que desde el inicio de la pandemia fue promovido por el movimiento estudiantil colombiano a través de diversas acciones colectivas (Aguilar-Forero, 2021).

Todo comenzó —o continuó más bien— cuando el Comité Nacional de Paro (en adelante CNP), integrado por centrales obreras y organizaciones campesinas, étnicas y estudiantiles, citaron a un paro nacional por la paz, la democracia y en contra de la reforma tributaria. Bajo el lema «La democracia no está en cuarentena», el CNP alentó las expresiones del inconformismo ciudadano que ya habían revolcado el panorama político en el paro nacional de 2019, y citó a esta jornada de protestas en contra de una reforma tributaria. Esta última pretendía quitarle a los sectores populares y a la clase media cerca de 27 billones de pesos, al incrementar el costo de algunos productos de la canasta familiar, subir el IVA al 19 % a los insumos agrícolas y los combustibles, gravar las rentas de las personas naturales con ingresos superiores a 2.5 millones de pesos mensuales, entre otros (Comité Nacional de Paro, 2021).

Muy rápidamente, la revuelta de abril dio paso a múltiples flujos de rebeldía social que, pese al intento del CNP de ejercer una coordinación política con un programa de reformas definidas, desataron protestas descentralizadas que ya no eran sectoriales (edu-

cación, trabajo, salud, etc.), sino transversales a todo el sistema de reglas neoliberales y a las lógicas de mediación, representación o delegación político-institucional (Richard, 2021). En grandes ciudades, pero también en pequeños municipios y ciudades intermedias, las multitudes dispersas y conectadas por grupos de WhatsApp y por contenidos circulares de manera instantánea en redes sociales digitales se tomaron las calles, las plazas y las estaciones de los sistemas de transporte. Después de días —e incluso meses— de ocupación intensa de espacios y ciberespacios, emergieron las ollas comunitarias y las asambleas populares, las cuales se apropiaron y renombraron lugares y, en medio de todo, se hizo cada vez más visible ese hilo inmenso que urde las resistencias: la *memoria*.

Fueron varios los sucesos que reposan en la memoria de los jóvenes y que se fueron acumulando hasta estallar en 2021. En primer lugar, desde inicios de la pandemia, cuando centenares de jóvenes se manifestaron en junio de 2020 por una cuarentena más digna, fueron reprimidos violentamente por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (en adelante Esmad): más de 100 detenidos y 20 heridos dejaron las protestas en varias ciudades el 15 de junio de 2020 (*Más de 100 detenidos...*, 2020). Luego, los sucesos de septiembre de 2020 expandieron las grietas y los dolores. El asesinato del estudiante de derecho Javier Ordóñez el 8 de septiembre de 2020 en Bogotá, a manos de la policía, desencadenó múltiples protestas que terminaron en lo que algunos denominaron «la masacre de Bogotá» (Duzán, 2020): 13 jóvenes asesinados con armas de fuego disparadas por la policía, cientos de heridos e incontables detenciones arbitrarias.

Meses después, el 24 de febrero de 2021, durante las protestas del día contra la brutalidad policial, las agresiones por parte de la fuerza pública fueron intensas y afectaron a muchos jóvenes, entre ellos a Gareth Sella, realizador audiovisual e integrante del colectivo juvenil Escudos Azules. Sella recibió un impacto en su ojo izquierdo con un proyectil de las denominadas «armas de baja letalidad» que utiliza el Esmad, lo que le causó la pérdida del 90 % de la visión en este ojo. Días después de esta agresión, la Policía y algunos medios de comunicación lo estigmatizaron e intentaron despertar sospechas sobre su comportamiento, vinculándolo con actos sospechosos y violentos debido a que algunos videos registraron que se cambió de ropa después de recibir el impacto.¹

¹ Sobre este hecho Sella (2021) explicó: «Yo creo que (lo de la ropa) es ese gancho del que se pueden agarrar para tratar de hacer legítima la violencia que ejercieron contra mí, pero no hay nada muy profundo. Era un overol antifluidos, que en esta época de covid no tiene ningún problema. No significa nada malo. Respecto a por qué me lo quito (...), por la cantidad de sangre que salió (...). Hay mucho susto de encontrarme a más policías, de encontrarme a más Esmad. Todos nos podemos imaginar la diferencia entre encontrar a DD. HH. y que me ayuden, a encontrarme el Esmad y que quieran dañarme más» (como es citado por Arango, 2021, §. 8).

Con esta base, resulta relevante abordar un acontecimiento reciente como el paro nacional de 2021 en Colombia, pues no existen aún investigaciones que estudien a profundidad algunos de sus rasgos, actores y situaciones. Asimismo, vale la pena hacer una contribución original en la que se vinculen dos conceptos centrales para las ciencias sociales de hoy, la memoria y el juvenicidio, a luz de esta experiencia colombiana. La presente investigación analiza la relación entre estos dos conceptos en el paro nacional de Colombia, entablando un diálogo con algunos trabajos sobre la memoria y el juvenicidio que han realizado aportes significativos y que, como antecedentes teóricos e investigativos, enmarcan y dan sentido a este estudio.

A manera de conceptualización, con respecto a la memoria es importante señalar que esta tiene una relación consustancial con luchas políticas en torno a las interpretaciones y representaciones sobre el pasado. En estas pugnas, ciertos actores, cargados de poder, han fijado una «verdad oficial» debido al peso que han tenido sus relatos para difundir e imponer una única interpretación de los acontecimientos ocurridos. Sin embargo, el sentido del pasado, como terreno de disputas:

Es un sentido activo, dado por agentes sociales que se ubican en escenarios de confrontación y lucha frente a otras interpretaciones, otros sentidos, o contra olvidos y silencio. Actores y militantes «usan» el pasado, colocando en la esfera pública de debate interpretaciones y sentidos del mismo. La intención es establecer/convencer/transmitir una narrativa, que pueda llegar a ser aceptada. (Jelin, 2002, p. 39)

Para Tischler (2010), sin memoria no hay posibilidad de cambio; no hay transformación de cara al futuro. El presente es la zona de contacto entre el pasado y el futuro, y la memoria, en lugar de «estar atrás» o venir desde el pasado hacia el presente, es un acto político del aquí y el ahora, mediante el cual se está mirando hacia el frente, pues como lo ha señalado el movimiento zapatista: *la memoria ve hacia delante*. En este orden de ideas, la memoria para los movimientos sociales no es un gesto nostálgico o romántico, sino una mediación estratégica para hacer frente a las diversas formas de explotación, injusticia y opresión (Tischler & Navarro, 2011). Como acto colectivo de interpretación del pasado desde los horizontes de sentido de las luchas del presente, la memoria les confiere densidad histórica a las disputas por el cambio social, en tanto «ya no es solo el enfrentamiento por una reivindicación determinada, sino una lucha en la que se ponen en movimiento las generaciones del pasado, sus logros, esperanzas y fracasos» (Tischler & Navarro, 2011, p. 71).

La memoria ha estado presente en los más recientes estallidos sociales en América Latina. El estallido de octubre de 2019 en Chile, por ejemplo, que inició con la movilización de estudiantes de secundaria por el alza del pasaje del metro, puede entenderse como una explosión de memorias de la exclusión, de la frustración crónica y de la indignación no solo frente al gobierno de derecha de Sebastián Piñera, sino de manera más amplia frente a la política representativa, frente a los discursos y memorias hegemónicas y frente a los legados de la Constitución de 1980 firmada por el exdictador Pinochet (Richard, 2021; Rivera-Aguilera *et al.*, 2021). En el estallido social de Colombia de 2019 la memoria también fue protagonista en los distintos actos que tuvieron lugar luego de que el joven estudiante de bachillerato, Dilan Cruz, fuera asesinado en el centro de Bogotá por un miembro del Esmad, en medio de las movilizaciones del paro nacional (Aguilar-Forero, 2020).

Ahora bien, los estallidos sociales en Colombia, como en Chile, también se pueden comprender como parte de una sinergia de protestas globales (Hong Kong, París, Quito, Barcelona, Mineápolis, entre otros) y como una respuesta de los jóvenes frente a la violencia estructural (pobreza, exclusión, precarización, injusticia), simbólica y directa, conjugadas en la acción represiva de los gobiernos (Rivera-Aguilera *et al.*, 2021). En efecto, uno de los elementos que encadena buena parte las revueltas sociales de los últimos años a nivel global, y que en Colombia une el estallido social de 2019 con el estallido de 2021, fue la violencia policial traducida en múltiples juvenicidios que dejaron una honda herida colectiva en los jóvenes.

Como explica Valenzuela (2015), el juvenicidio no solo alude al asesinato selectivo de jóvenes, sino también a procesos sociales más amplios que lo posibilitan. Estos procesos incluyen la precarización creciente de su vida económica y social manifestada en la pobreza, la desigualdad y el desempleo juvenil, en el aumento de su vulnerabilidad ciudadana y en la estigmatización o estereotipamiento de sus conductas (en especial de las de los jóvenes de sectores populares o de minorías étnicas y sexuales), lo que propicia la construcción de identidades juveniles desacreditadas. Todo ello se acompaña de «la adulteración del Estado y de las instituciones de administración de justicia que producen y reproducen corrupción e impunidad» (Valenzuela, 2015, p. 12).

Como Cancerbero, el juvenicidio tiene varios rostros y expresiones que se superponen para atentar contra la vida de los jóvenes, «porque no solo se mata a los jóvenes con balas, también se los mata borrándolos de la vida social, económica y política, eliminando su rostro y buen nombre de las pantallas, persiguiéndolos o señalándolos como el pe-

ligro social» (Muñoz, 2015, p. 132). La estigmatización, elemento constitutivo del juvenicidio simbólico, involucra prácticas de representación y criminalización de las conductas y estilos de vida juveniles, que son agenciadas desde ciertos sectores políticos, económicos y mediáticos con el fin de justificar la muerte de los jóvenes al reducirlos a la imagen del revoltoso, vago, violento, peligroso y criminal: «construida la criminalización y estigmatización de los grupos, resulta relativamente fácil justificar los actos de abuso y vejaciones que padecen» (Valenzuela, 2015, p. 24).

Esta estigmatización se alimenta del estereotipo. Como lo explicó Hall (1997/2010) el estereotipo es una práctica significativa mediante la cual se reduce a ciertas personas a unas cuantas características simples y esenciales que son representadas como fijas: «la estereotipación reduce, esencializa, naturaliza y fija la diferencia» (p. 430). Asimismo, por medio de esta práctica se trazan límites entre lo *normal* y lo *anormal*, entre lo aceptable y lo inaceptable, motivo por el cual se trata de una práctica representacional basada en la preservación del orden social y simbólico instituido, que suele ocurrir en donde hay grandes desigualdades de poder. Por consiguiente, el juvenicidio simbólico, soportando en la estigmatización mediática/cultural y en la producción de estereotipos, es una forma de violencia simbólica que se entrelaza con el juvenicidio económico (pobreza, desempleo, precarización) (Feixa *et al.*, 2015) y que busca legitimar el asesinato sistemático e impune de jóvenes.

Con base en estos aportes de la producción teórica e investigativa previa, en este artículo se busca, como objetivo central, escudriñar el vínculo entre memoria y juvenicidio en el estallido social de Colombia de 2021. Para ello se propone y responde, en las próximas páginas, la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo se relacionaron la memoria y el juvenicidio en el estallido social de 2021 en Colombia?

Método

El presente artículo se apoya en un enfoque epistemológico crítico, cuyo énfasis no es solo explicar o comprender un fenómeno, sino producir, a través del trabajo intelectual, interrupciones y transformaciones en las relaciones de poder y de significación presentes tanto dentro como fuera de la academia. En dicho enfoque, como afirmó Hall (1992/2010) a propósito de la aproximación crítica de los estudios culturales, siempre «hay algo en juego»; esto es, una vocación política que atraviesa la producción de conocimiento y que hace de esta un proyecto intelectual y político de transformación.

El asumir una posición teórica y política situada en un enfoque crítico conlleva ciertas implicaciones epistemológicas y metodológicas. Entre estas se encuentra la preferencia por diseños colaborativos como la etnografía militante, una forma de investigación políticamente comprometida que se desarrolla desde dentro y no desde afuera de los movimientos (Juris, 2007). Este tipo de estudio permite llegar a comprensiones y hallazgos que no son fácilmente accesibles a través de aproximaciones positivistas convencionales, las cuales se refugian en la radical separación entre sujetos y objetos, y entre hechos y valores, como garantía de *objetividad* y de *neutralidad* (Restrepo, 2016). Como explican Juris y Khasnabish (2013), la etnografía militante requiere involucrarse directamente con una lucha en particular a través de actividades en las que se puede poner incluso en riesgo el propio cuerpo durante las movilizaciones. Esto «permite una comprensión cognitiva más profunda a la vez que ofrece un sentido del involucramiento emocional gestado en la práctica política» (Juris & Khasnabish 2013, p. 26).

Para efectos de este estudio, lo anterior implicó participar en varias de las jornadas del paro nacional y combinar el activismo en las calles con el análisis de los registros que los jóvenes dejaban en su trasegar por las redes sociales digitales. En particular, se participó en varias de las jornadas del paro nacional en la ciudad de Bogotá y se analizaron las publicaciones que, entre el 28 de abril y el 2 de junio de 2021, realizó Escudos Azules en Twitter. Escudos Azules es un colectivo juvenil que hace parte de la «primera línea», organización compleja y heterogénea que agrupa a jóvenes de distintos sectores socioeconómicos y niveles de formación unidos en torno a un propósito común: proteger a los manifestantes de las agresiones por parte del Esmad. El énfasis en este colectivo proviene de la identificación del papel crucial que ya venía desempeñando en las protestas sociales de los últimos años en Colombia y en el reconocimiento de su liderazgo y creatividad promoviendo un amplio abanico de acciones colectivas.

En las jornadas del paro nacional se realizó observación participante y se registró la información en un formato de observación previamente diseñado. Por su parte, el análisis de los mensajes y contenidos publicados en la cuenta de Twitter de Escudos Azules en el periodo de tiempo señalado se basó en la generación de códigos y categorías emergentes a partir de categorías deductivas. Para ello, se apeló a dos criterios de inclusión y exclusión de los contenidos objeto de análisis: 1) *margen temporal*, se seleccionaron solo los contenidos publicados por el colectivo en Twitter entre el 28 de abril y el 2 de junio de 2021; 2) *pertinencia*, se privilegiaron los contenidos que, por los términos utilizados, se acercaban más a las dos categorías teóricas previas del estudio: memoria y juvenicidio.

Bajo estos dos criterios, se seleccionó un corpus de 25 mensajes/contenidos publicados que utilizaban palabras, imágenes o expresiones relacionadas con tales categorías. Luego de ello, los contenidos fueron reagrupados en categorías emergentes que permitieron identificar un conjunto de acciones colectivas y de horizontes de sentido (reivindicaciones) de Escudos Azules. Por último, los resultados de este análisis se triangularon con los registros de los formatos de observación para confirmar y complementar las categorías producidas y poner en diálogo los hallazgos con los aportes teóricos en torno a la construcción de memoria y el juvenicidio. El proceso de investigación integró prácticas éticas relevantes como presentar el objetivo del estudio a las personas más cercanas con las que se interactuó y garantizar la confidencialidad y anonimato en el uso de la información personal de quienes así lo solicitaron. Del mismo modo, se asumió la honestidad como principio fundamental a lo largo del proceso, razón por la cual, en lugar de querer proyectar una imagen de total coherencia y perfección, se asumieron con responsabilidad y transparencia las limitaciones del estudio. Entre estas se encuentra la concentración del poder de la representación en el autor de este texto, quien privilegia su experiencia directa, así como sus análisis e interpretaciones, marginando otras opiniones y perspectivas.

Resultados

Huellas del juvenicidio: un momento etnográfico

La presencia masiva y perseverante de los jóvenes en las calles encuentra su razón de ser en la conciencia histórica y la memoria disidente que les arropó de principio a fin. Los jóvenes se tomaron las calles, conformaron puntos de concentración y resistencia, gestaron redes de solidaridad a través de la autogestión y la obtención de donaciones, propiciaron asambleas populares desde las que intercambiaron saberes y construyeron pliegos de peticiones propios, al margen de las peticiones del CNP, entre otras cosas, gracias a lo que encontraron en los cajones de sus recuerdos: 6402 *falsos positivos*,² masacre de 13 jóvenes el 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá y una larga historia de vio-

² Según la Comisión de la Verdad (2022) los falsos positivos son ejecuciones extrajudiciales derivadas de una presión por bajas en combate que propició la comisión de crímenes por parte de las Fuerzas Militares, en los que se presentó como guerrilleros dados de baja a personas inocentes y asesinadas en estado de indefensión. «El periodo de exacerbación de los denominados "falsos positivos" transcurrió entre 2002 y 2008. Estos crímenes fueron propiciados por un sistema de disposiciones legales y extralegales nacidas desde el mismo Gobierno e implementadas por las Fuerzas Militares» (p. 497).

lencia policial que ha afectado principalmente a los jóvenes y que se agudizó durante y después de este paro nacional.

Como lo señaló la organización no gubernamental Temblores (2021), durante 2021 se registraron 5808 casos de violencia policial, que incluyeron 80 casos de violencia homicida, 47 casos de violencia sexual, 105 agresiones oculares, 2053 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 66 montajes judiciales relacionados con la protesta social, 16 casos de hostigamiento a actividades comunitarias como ollas o muestras culturales y artísticas, y 1991 casos de violencia física. De los 80 homicidios, 47 ocurrieron durante el estallido social de 2021 y 17 (el 21 %) fueron contra personas racializadas. De igual forma, los jóvenes entre 18 y 33 fueron el grupo etario que registró «mayor número de homicidios, con el 61.25 % del total. Esto muestra cómo la población joven, caracterizada por su amplia participación en manifestaciones y otras actividades en el espacio público, es más propensa a ser asesinada por la Policía» (p. 7)

Hastados de la violencia policial, del asesinato de líderes sociales y del incumplimiento del acuerdo de paz, el 28 de abril de 2021 decidimos salir a las calles. Comenzamos el recorrido en las horas de la mañana desde la avenida El Dorado de Bogotá hacia la plaza de Bolívar. Desde el inicio llamó la atención la presencia de personal médico que se movilizaba en contra del proyecto de ley 010 de 2020 que avanzaba en su proceso legislativo en el Congreso de Colombia. Dicho proyecto, que según algunos sectores profundizaba la privatización del sistema de salud, fue retirado el 19 de mayo de 2021, en lo que algunos congresistas de oposición y medios de comunicación catalogaron como «la segunda victoria» del paro nacional, pues su retiro se dio algunos días después de aquel de la reforma tributaria.

Muy cerca de los sindicatos de trabajadores de la salud marchaba la Confederación de Trabajadores de Colombia, una de las centrales obreras que integran el CNP convocante del paro nacional. En medio de estas dos organizaciones marchamos durante casi dos horas entre cánticos, música, megáfonos y tapabocas, acompañados por las personas que desde las ventanas se asomaban a observar o a manifestar su apoyo repicando ollas y cacerolas. El recorrido nos llevó hasta la avenida Jiménez con carrera Séptima, un lugar emblemático para la memoria histórica del país por albergar, entre otros, los vestigios del magnicidio del líder político liberal Jorge Eliécer Gaitán.³

³ Asesinato ocurrido el 9 de abril de 1948. Fue orquestado presuntamente por el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez (Braun, 2008). Este suceso desencadenó la más grande insurrección popular de la historia de Colombia y profundizó el conflicto bipartidista: el partido conservador ejerció la violencia desde el Estado y generó, como reacción, la organización de destacamentos armados entre los liberales perseguidos (Perea, 2009).

Estando allí, emergió el primer eslabón de la relación memoria-juvenicidio en el paro nacional. En este punto encontramos el camión de la memoria de Raúl Carvajal, forrado con carteles y fotografías alusivas al crimen de su hijo. Después de 14 años recorriendo Colombia en busca de verdad y justicia, el 28 de abril de 2021 don Raúl parquéó su furgón en ese mismo lugar, como lo hacía casi a diario, para contarle a los transeúntes lo sucedido: el cabo Carvajal, su hijo, fue asesinado el 8 de octubre de 2006 presuntamente por el Ejército, por negarse a asesinar a dos jóvenes que sus superiores querían hacer pasar como guerrilleros. El cabo «es uno más de los 6402 casos de los llamados falsos positivos que ocurrieron en el gobierno de Álvaro Uribe, entre el periodo 2002 y 2008. Y su padre al igual que los demás exige justicia» (Morales, 2021, §. 1). Allí estuvimos acompañando a Raúl Carvajal, el valiente y persistente padre, sin sospechar que no lo volveríamos a ver y que, tras fallecer un mes después a causa del covid-19, solo nos quedaría el recuerdo del ímpetu de su lucha contra la impunidad y los mensajes que en su honor permanecen en los muros (figura 1).

Figura 1

Mural en honor a Raúl Carvajal



Nota. Mural ubicado en la avenida 19 con carrera cuarta en el centro de Bogotá. © Nicolás Aguilar, 2022.

Minutos después, por este mismo lugar de la carrera Séptima con avenida Jiménez vimos pasar a Mafapo, Madres de Falsos Positivos, asociación que surge en 2010 y que está conformada por las madres y familiares de 19 jóvenes asesinados extrajudicialmente, catorce en Soacha y cinco en Bogotá (Comisión de la Verdad, 2018). Una de las mujeres se acercó a nosotros y nos entregó un pequeño flyer con la imagen tantas veces censurada

del mural *¿Quién dio la orden?* La recibimos, la saludamos y la vimos continuar su camino hacia la plaza de Bolívar, mientras observábamos la pequeña pieza comunicativa poco antes de abandonar esta primera jornada de protestas.

El mural *¿Quién dio la orden?*, en el que se señala a altos mandos del Ejército del asesinato de jóvenes que fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate, ha sido censurado en repetidas ocasiones: primero por el Ejército, que lo borró con pintura gris en octubre de 2019 (Forero, 2021); luego por el juzgado 13 civil del circuito de Bogotá que en febrero de 2020 ordenó al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice, 2020) retirar la imagen de los muros e incluso de las redes sociales; y más adelante, el 5 de marzo de 2021, por actores indeterminados que de nuevo lo sabotearon dos días después de haber sido plasmado en la calle 80 con carrera 30 de Bogotá, cerca de la Escuela Militar José María Córdoba. Este mural en sus inicios denunciaba 5763 personas asesinadas, cifra que aparecía escrita en la esquina superior izquierda. Debajo de esta se podía leer el mensaje «falsos positivos = asesinato de civiles 2000-2010 bajo el mando de» y más abajo aparecía la cara de cinco generales,⁴ entre ellos la de Mario Montoya, también implicado en otro de los desafortunados hitos del juvenicidio en Colombia que tuvo lugar varios años atrás: la Operación Orión.⁵

Días después de la primera jornada de protestas en la que participamos, la estética de este mural, que se caracteriza por el fondo amarillo con la combinación de letras negras y rojas con mensajes de denuncia, permitió resignificar un tuit del expresidente Uribe. El 30 de abril de 2021 Uribe trinó: «Apoyemos el derecho de los soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y

⁴ Los rostros de los militares aparecen junto con «las cifras estimadas de los asesinatos en las zonas que comandaban. ¿Fueron ellos quienes dieron la orden? ¿Fueron otros más arriba?» (Osorio, 2021, § 2). Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz en febrero de 2021 precisara la cifra de 6402 falsos positivos documentados entre 2002 y 2008, el mural se ha transformado: en su última versión incluye la cifra documentada por la JEP y el rostro ya no de 5, sino de 13 altos mandos del Ejército. Asimismo, ha tomado la forma de *flyers*, camisetas, gorras e incluso tapabocas, y ha sido protegido por la Corte Constitucional de Colombia mediante un fallo de noviembre de 2021 en el que protege la libertad de expresión y el «derecho a la memoria que tienen las víctimas de la guerra en Colombia» (Osorio, 2021, § 8).

⁵ Durante la Operación Orión, que tuvo lugar en la Comuna 13 de Medellín en 2002, los generales Leonardo Gallego y Mario Montoya del Ejército Nacional, junto con la IV Brigada de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, actuaron presuntamente en conjunto con el grupo paramilitar Bloque Cacique Nutibara al mando de alias «Don Berna» y su hombre de confianza Fabio Orión (Movice, 2013). En sus operativos militares se presentaron ejecuciones extrajudiciales, allanamientos ilegales, detenciones masivas y desapariciones forzadas de más de 300 personas, en su mayoría jóvenes, en un caso en el que el Estado «no ha mostrado resultados contundentes en investigar, juzgar y sancionar los hechos y sus responsables» (Movice, 2013, p. 148).

bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico». Este tuit que promovía la violencia estatal contra los manifestantes, a quienes estigmatizaba como vándalos y terroristas, se incluyó en piezas comunicativas que circularon en internet y en las que, con la estética y los colores del mural, se acompañó el polémico mensaje con una corta y contundente frase: ¡Uribe ya dio la orden!

Este tipo de piezas comunicativas se convirtieron en vehículos de la memoria que permitieron confrontar los mensajes divulgados para estigmatizar y justificar los crímenes de Estado. Durante el paro nacional de 2021 se pudo apreciar una gran diversidad de contenidos (infografías, memes, imágenes-ícono, videos) y piezas que, como la recién mencionada, resignificaron los mensajes transmitidos por los medios dominantes o por los actores afines al Gobierno. Contenidos digitales que se complementaron con piezas impresas y con una explosión aluvial de prácticas artísticas en las que el arte urbano ocupó un lugar central. En Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y en muchas otras ciudades pudimos apreciar incontables grafitis en muros, puentes, calles y pisos con mensajes que expresaron los sentires y malestares de los jóvenes.

Se trató de otro eslabón de la relación memoria-juenicidio: acciones colectivas del movimiento grafitero que a través del arte urbano denunciaron los excesos de la fuerza pública particularmente en contra de los jóvenes, con mensajes como: «Nos están matando», «Estado Indolente», «Digna Rabia», «SOS Genocidio Colombia» o «Estado Asesino». Varios de estos mensajes fueron borrados con pintura gris por el Ejército o por otros ciudadanos en una clara disputa por las narrativas, registros y memorias del paro nacional (Ramírez, 2021). Como Señala Catela (2019) «cuando un mural es tapado, comienza en ese mismo acto a tornarse relevante, ya que su sentido fue apropiado por otros, en la acción de volver a darle sentido» (p. 93). Quizás por esto los murales tachados adquirieron mayor relevancia, legitimidad, y varios de ellos, pese a haber sido borrados, renacieron y fueron nuevamente pintados.

Escudos Azules: «¡Por nuestros muertos ni un minuto de silencio!»

El colectivo Escudos Azules, integrado por jóvenes universitarios, trabajadores independientes, artistas y desempleados que se conocieron a través de redes sociales (Cárdenas, 2021), surgió en el paro nacional de 2019 como consecuencia de un juenicidio: el asesinato de Dilan Cruz por parte de un miembro del Esmad. Si bien en el paro de 2019 ya se identificaban varias de las causas que impulsaron también el paro de 2021 (como los

proyectos de reforma tributaria, el incumplimiento en la implementación del acuerdo de paz firmado con las Farc-EP y la estigmatización de la protesta social), una de sus novedades fue la emergencia de un nuevo actor colectivo en Colombia: la primera línea (Aguilar-Forero, 2020).

Esta compleja organización juvenil, a la que pertenece Escudos Azules, apareció en la escena pública colombiana con el propósito de proteger a los manifestantes de las agresiones de la fuerza pública y evitar que nuevos asesinatos de jóvenes, como el de Dilan Cruz, tuvieran lugar. Para ello, comenzaron a ubicarse en la parte delantera de las marchas portando escudos azules y cascos que ejercieron como contenedores de la violencia policial y protectores de los manifestantes. Como consecuencia de la creciente profundización de la violencia policial y de los juvenicidios en medio de las protestas, cada vez más jóvenes indignados se unieron a la primera línea y, para el paro nacional de 2021, esta tomó mucha más fuerza y vitalidad. Desde los primeros días, en Bogotá y en muchas otras ciudades del país, los jóvenes de la primera línea ocuparon espacios públicos, los renombraron y resignificaron, permanecieron en ellos durante más de un mes y casi a diario confrontaron al Esmad. En el proceso, en los lugares de concentración realizaron actos de memoria, como velatones, para conmemorar y recordar a los jóvenes asesinados.

De igual manera, poco a poco desarrollaron formas organizativas cada vez más complejas en las que las primeras líneas encargadas de la protección de los manifestantes (con sus simbólicos escudos, cascos y gafas antipacto) estuvieron respaldadas por segundas líneas encargadas de neutralizar el impacto de los gases con neutralizador (es decir, agua y leche de magnesia), terceras líneas encargadas de elementos logísticos como la gestión de donaciones para la alimentación de quienes permanecieron en los puntos de concentración y cuartas líneas a cargo de prestar primeros auxilios a los manifestantes heridos.

De manera progresiva, entre los colectivos que han hecho parte de la primera línea, Escudos Azules se comenzó a destacar por la organización de acciones colectivas. De hecho, un tercer eslabón de la relación memoria-juvenicidio se puede encontrar en el conjunto de acciones colectivas por la memoria que Escudos Azules promovió para denunciar el juvenicidio. Al analizar su cuenta de Twitter fue posible identificar las siguientes acciones que se convirtieron en actos de memoria: performances, ollas comunitarias, velatones y transmisiones en vivo para registrar/denunciar la violencia policial.

Entre los performances que incrementaron la visibilidad de Escudos Azules en el paro nacional de 2021 se destacan los que tuvieron lugar frente a las sedes de grandes

medios de comunicación como *Semana* y Caracol Radio. En estos tiñeron de rojo el agua de algunas piletas o fuentes que adornan las sedes de tales medios para denunciar su complicidad en el derramamiento de sangre de los jóvenes, así como en el ocultamiento o minimización de las cifras de juvenicidios, de los abusos policiales y de la estigmatización de los manifestantes. Después de los performances circularon en sus redes sociales digitales las imágenes de estas acciones colectivas, acompañadas de mensajes como el siguiente, en el que denunciaron a la directora de la revista *Semana* Vicky Dávila: «#vickysemana está manchada de la sangre de los 37 jóvenes que murieron en el marco del #ParoNacionalColombia ¡Por nuestros muertos ni un minuto de silencio!» (Escudos Azules, 2021).

De igual forma, Escudos Azules comenzó a trazar horizontes de sentido y a conectar las grietas de rebeldía desde Twitter: «Nuestra victoria está en la empatía que crece día a día en el corazón de los colombianos. Démosle una dirección: Asambleas populares, democratización de saberes, formación y pedagogía, apoyo mutuo, ollas comunitarias, autogestión y colectividad, construcción popular» (Escudos Azules, 2021a). Más adelante, promovieron una semana de la solidaridad y la resistencia en la que impulsaron jornadas de distribución de alimentos y de kits de primeros auxilios obtenidos mediante donaciones en su mayoría realizadas por los vecinos de los sectores en los que los jóvenes se concentraron y permanecieron durante meses. También, en lugares como el portal de Las Américas de Bogotá, una estación del sistema de transporte masivo que fue apropiada y renombrada por los jóvenes como «Portal Resistencia», convocaron a ollas comunitarias:

En el marco de la semana de resistencia y solidaridad estaremos en una de las zonas más golpeadas por la brutalidad policial. Están invitados a caer, cocinar y construir alrededor del calor de la olla y la ternura de los pueblos. ¡Un abrazo y más tarde nos vemos! Gran olla popular y comunitaria, organicemos la resistencia: Pedagogía del paro – construcción popular – encuentro de saberes – solidaridad y resistencia – propuestas – asamblea a la calle – formación política – micrófono abierto. #14 de mayo. 12 a 1 p.m. Portal Américas. (Escudos Azules, 2021b)

Desde estas ollas comunitarias emergieron redes de solidaridad y ejercicios de memoria que permitieron consolidar posturas y demandas colectivas. El mismo día de la olla comunitaria, el 14 de mayo, desde Twitter Escudos Azules comenzó a expresar de manera clara las reivindicaciones y razón de ser del colectivo: «#ReformarLaPolicía Es un proceso largo, estructural y necesario para la defensa de la vida. El paro es la plata-

forma para exigir los cimientos de este: eliminar el fuero militar,⁶ pasar la policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior y desmontar el Esmad». (Escudos Azules, 2021c). Días después reclamaron un cambio estructural de las instituciones, en particular de la Policía (que incluyera capacitación en derechos humanos a sus miembros), para confrontar la impunidad. También destacaron la solidaridad que recibieron por parte de muchas personas y denunciaron los excesos de la fuerza pública: «La solidaridad de los pueblos es tremenda. En los conjuntos residenciales la gente ayuda a los manifestantes contra los gases. ¿La respuesta del Esmad? Como venganza, lanzar gases a los conjuntos. El castigo. El trato de guerra a la protesta, la unión y la solidaridad. #SOSportalamericas» (Escudos Azules, 2021d).

En estos espacios de encuentro y construcción popular no faltaron las imágenes de los jóvenes asesinados en medio del paro y, conforme se profundizaba la violencia policial, se fortalecía también la creatividad y se generalizaban los actos de memoria. Las velatonas comenzaron a ser frecuentes como forma de protesta y como acto simbólico para rendir homenaje a las víctimas de las jornadas del paro nacional. En estas acciones colectivas nocturnas y pacíficas se denunció la brutalidad policial, se protestó por las 379 personas reportadas como desaparecidas (*Derecho de petición de Indepaz...*, 2021), se exigió la renuncia del ministro de Defensa por su responsabilidad en la masacre de los jóvenes y se cuestionó el rol ejercido por los grandes medios de comunicación por su invisibilización o minimización de las vulneraciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública.

Con respecto a este último asunto, el rol de los grandes medios, Escudos Azules cuestionó lo que denominó como «periodismo cómplice y genocida», y como alternativa promovió un ejercicio de prensa libre a través de videos en vivo grabados con teléfonos móviles en los que transmitieron, en tiempo real, incontables abusos por parte del Esmad en contra de los manifestantes. Esta fue otra forma más de registrar, denunciar y hacer memoria de los juvenicidios ocurridos durante el paro nacional de 2021.

Cabe destacar que las redes sociales del colectivo no solo permitieron identificar sus acciones colectivas y sus principales motivaciones y propuestas. Además de esto, evidenciaron las tensiones entre distintos actores que impulsaron el paro nacional: mostraron

⁶ La Comisión de la Verdad (2022) confirmó que la justicia penal militar encubrió la falsificación de pruebas en los casos de «falsos positivos». Asimismo, señaló que en estos crímenes hubo participación de integrantes de la Fiscalía y el CTI, los cuales contribuyeron a la dinámica de *legalización* de cadáveres, «certificando pruebas falsas, implantando evidencia fraudulenta y generando un esquema de impunidad para que la maquinaria de muerte se siguiera cometiendo hasta llegar al menos a 6402 víctimas entre los años 2002 y 2008» (p. 544)

la división entre el CNP y sectores juveniles como la primera línea, en particular Escudos Azules, quienes en repetidas oportunidades se manifestaron en contra del CNP: «No permitamos que falsos representantes instrumentalicen nuestras luchas, no más caudillos. La calle es el escenario perfecto para empezar a organizarnos y escoger verdaderos intermediarios entre nuestra voluntad y la capacidad del Estado para llevar a cabo nuestras exigencias». (Escudos Azules, 2021e). Las diferencias con el CNP, originadas en cierto adultocentrismo que privilegia las visiones de mundo de hombres, adultos y sindicalistas al interior de este, así como el sentimiento de abandono por parte del Estado y sus instituciones, derivaron en un lema muy utilizado por Escudos Azules en sus distintas plataformas y acciones colectivas: *Solo el pueblo salva al pueblo*.

Detrás de las críticas al CNP se encuentra un cuestionamiento a la democracia representativa y una reivindicación de la democracia directa, de la autoorganización, la autogestión y la autodeterminación. «Solo el pueblo salva al pueblo» no solo expresa el malestar frente a aquellos representantes que desde la perspectiva de los jóvenes no los representan, sino también muestra un *desencanto radical* que se manifiesta en la ausencia total de confianza en las instituciones, lo que genera en los jóvenes la certeza de que están solos frente a un mundo hostil (Reguillo, 2017).

Lo cierto es que, aunque no hubo silencio y persistió la memoria y la denuncia social, los muertos no cesaron y, por el contrario, el juvenicidio simbólico soportado en la estigmatización se viralizó y condujo a más y más asesinatos. Desde «la edición del 29 de abril de *El Tiempo* apareció la imagen de un bus de transporte público en llamas que daba a entender que el paro no era más que vandalismo» (Medina 2021, § 18). Así, poco a poco, el *vandalismo* comenzó a ser la etiqueta más utilizada por los grandes medios y los funcionarios del Gobierno para referirse a diversas acciones que tuvieron lugar durante las protestas (bloqueos de vías, daño a establecimientos públicos y privados, entre otras) y muy rápidamente los jóvenes de la primera línea fueron reducidos a *criminales*, *terroristas* y, de manera generalizada, *vándalos*.

El mismo ministro de Defensa, Diego Molano, en sus declaraciones del 3 de mayo de 2021, equiparó a Escudos Azules con organizaciones al margen de la ley que supuestamente estaban detrás de los disturbios causados en los primeros días de las protestas: «gracias al trabajo del grupo especial contra el vandalismo y delitos conexos hemos identificado algunas de estas organizaciones criminales: Movimiento JM19, Movimiento Bolivariano de disidencias de las Farc de Gentil Duarte, los capuchos, los Escudos Azules» (Molano, como es citado en *Con la estigmatización...*, 2021, §. 5). Lo anterior evidencia que la respuesta

del Gobierno a los reclamos ciudadanos fue la estigmatización y la violencia de Estado legitimada en la lucha contra los «vándalos y terroristas», respuesta que se apoyó en un discurso que buscó «trasladar la figura de la guerrilla de las Farc como el enemigo interno a la imagen del joven violento que pretende destruir los bienes públicos y privados, enfrentar la institucionalidad, saquear establecimientos comerciales y atentar contra la vida de los integrantes de la fuerza pública» (Amador-Baquirol, 2021, § 6). La estigmatización justificó la militarización de las ciudades impulsada por el presidente Iván Duque, quien, a través del Ministerio del Interior, expidió el 28 de mayo el Decreto 575 de 2021 mediante el cual se promovió la figura de la asistencia militar para restablecer el orden público, dando un tratamiento de guerra a la protesta social (*Decreto 575 de 2021...*, 2021).

Discusión

En medio de la pandemia causada por el nuevo coronavirus que no solo visibilizó, sino que profundizó la injusticia, la discriminación, la exclusión social y el sufrimiento (Santos, 2020), estalló en Colombia un paro nacional de enormes proporciones. Las energías de descontento e indignación que se venían condensando desde años atrás explotaron el 28 de abril de 2021 en un paro en el que los jóvenes fueron los protagonistas. Jóvenes cansados de la ausencia de oportunidades, de la precariedad laboral, de la exclusión de la vida pública, de la limitación de sus derechos (a la educación, a la salud, a la locomoción, a la protesta), de la eliminación física y de la estigmatización mediática que les representa como predelincuentes o fuente de peligro para la sociedad (Muñoz, 2015), salieron a las calles y se apropiaron de espacios públicos durante varios meses para manifestar su malestar y su desencanto radical.

El presente estudio permitió concluir que la presencia masiva de los jóvenes en las calles fue el resultado de una explosión de memorias del juvenicidio en Colombia. El recuerdo de los 6402 falsos positivos, de la masacre de Bogotá y de una larga historia de exclusión social expresada en pobreza, desempleo, vulnerabilidad, precarización y criminalización que ha afectado especialmente a los jóvenes de sectores populares (Valenzuela, 2015) fue lo que los hizo salir a las calles y permanecer en ellas. Como señala Muñoz (2015) con respecto a los falsos positivos, estos se soportaron en diversas prácticas como simular los combates, alterar la escena del crimen o realizar declaraciones públicas que estigmatizaron a los jóvenes y minimizaron la responsabilidad de los militares, con el fin

de que la sociedad civil identificara a los jóvenes como enemigos (bandidos, guerrilleros, terroristas) para justificar su eliminación.⁷

En el paro nacional operó la misma lógica vinculada con el juvenicidio simbólico: la estigmatización, la construcción de los jóvenes —en especial de la primera línea— como enemigos, la minimización de la violencia policial y de los responsables de esta, la reinante impunidad, entre otros. Esto fue posible por la construcción de identidades desacreditadas, esto es, descalificadas de manera anticipada (Valenzuela, 2015), independientemente de sus rasgos, prácticas, posturas o conductas. El juvenicidio, como una forma de necropoder, pasa por la definición de «quién tiene importancia y quién no la tiene, quién está desprovisto de valor y puede ser fácilmente sustituible y quién no» (Mbembe, 2011, p. 46). El juvenicidio es una de las expresiones de la necropolítica (junto con el feminicidio y el genocidio) e implica, al igual que esta, una gestión política de los riesgos, debido a que se somete al riesgo de la muerte a unas poblaciones más que a otras: es a los jóvenes precarizados, excluidos y estigmatizados a quienes más se somete al riesgo de la muerte o, peor aún, se les asesina sistemáticamente.

Ahora bien, ¿cómo se relacionaron la memoria y el juvenicidio en el paro nacional de Colombia de 2021? Aunque el juvenicidio permite nombrar la desaparición y eliminación sistemática de jóvenes, proyecto necropolítico que aceita la maquinaria del neoliberalismo, este nunca logra reducirlos a simples reproductores de la realidad que los excluye, pues a la máquina de muerte ellos y ellas oponen resistencia creativa (Reguillo, 2015). Como se pudo apreciar en las páginas anteriores, la memoria y el juvenicidio se entrelazaron en un conjunto de acciones colectivas en las que, a través de distintos ejercicios de memoria, se confrontó el asesinato sistemático y la violencia simbólica que afecta a los jóvenes.

Entre los eslabones que vincularon la memoria y el juvenicidio, este estudio permitió identificar tres que emergieron como relevantes: el primero fue la acción colectiva por la memoria promovida por los padres y madres de los jóvenes asesinados, quienes albergan, como don Raúl Carvajal y las madres de falsos positivos, la memoria de sus hijos y reclaman justicia por medio de su presencia física en las calles y de distintos vehículos de

⁷ Para la Comisión de la Verdad (2022) en los crímenes de Estado conocidos como falsos positivos se usó la lógica del enemigo para justificar los homicidios de personas en condiciones de indefensión y mostrar resultados en la lucha contrainsurgente: «esta construcción del enemigo con diferentes denominaciones ha sido parte de la concepción del modelo de seguridad en Colombia. En este "modo guerra", una parte considerable de la población civil, las luchas sociales y las movilizaciones se convirtieron en parte de dicho enemigo por eliminar» (p. 485).

la memoria: un camión convertido en galería de la memoria y piezas comunicativas como los *flyers* alusivos al mural *¿Quién dio la orden?* Al respecto, es importante mencionar que, si bien durante el paro nacional de 2021 los sistemas de representación y estigmatización dominantes intentaron encapsular a los jóvenes que se manifestaron en la etiqueta de vándalos, criminales y terroristas, ellos respondieron con acciones colectivas y comunicativas que lograron interrumpir las representaciones dominantes, transcodificando imágenes negativas con significados nuevos (Hall, 1997/2010).

Tal fue el caso de la imagen que circuló en redes sociales en la que, utilizando el tuit del expresidente Uribe en el que se criminalizaba la protesta social y se justificaba la violencia estatal, se creó una pieza comunicativa contrainformativa que apeló a la estética del mural *¿Quién dio la orden?* y que afloró como otra plataforma de construcción de memoria y de denuncia de los juvenicidios. Como explicó Hall (1997/2010), el significado nunca puede ser totalmente fijado. Si el significado que estereotipa y criminaliza pudiera ser fijado, no habría posibilidad de cambio: «las palabras y las imágenes cargan connotaciones sobre las que nadie tiene control completo y estos significados marginales o sumergidos vienen a la superficie permitiendo que se construyan diferentes significados, que diferentes cosas se muestren y se digan» (Hall, 1997/2010, p. 439).

El segundo eslabón fueron las acciones colectivas de los jóvenes del movimiento grafitero. De manera similar a lo señalado en otros estudios que se refieren al arte urbano (Aguilar-Forero, 2017; Catela, 2019; Molina, 2020), en el paro nacional los jóvenes convirtieron los muros y los pisos en lienzos que dotaron de materialidad a las memorias. Lo anterior en medio de luchas políticas en los que los murales o *pintadas* (grandes mensajes en el piso que solo se pueden leer desde las alturas) fueron borrados por contradictores de las consignas plasmadas por los jóvenes, para luego ser nuevamente pintados por estos. Los muros gritaron, entraron en pugna, expresaron la digna rabia de los jóvenes durante el paro nacional y perduraron en el tiempo como testimonio de lo acontecido: como memoria viva.

Como señaló Catela (2019), los murales constituyen marcas de memoria que producen y resignifican lugares, desnaturalizan la idea de las memorias como algo que se cristaliza exclusivamente en sitios institucionales y expresan disputas en un campo político: «Tapar murales, tachar pintadas, borrar grafitis, son prácticas que expresan las luchas simbólicas por imponer miradas políticas en el espacio público sobre el pasado reciente» (p. 93). Los murales de denuncia de la violencia policial que fueron borrados evidencian las disputas en torno a «quiénes pueden decir y quiénes pueden responder en los sitios

de memoria, en los muros de la ciudad, en los territorios de memoria que expanden o achican sus fronteras» (Catela, 2019, p. 93).

Por último, el tercer eslabón de la relación memoria-juvenicidio se halló en las acciones colectivas por la memoria de Escudos Azules: performances, ollas comunitarias, velaciones y ejercicios de lo que denominaron *prensa libre* demostraron que la memoria no es monopolio de los jueces o de los procesos de justicia transicional, sino que puede estar en las calles (Osorio, 2021), en los espacios de encuentro y en las redes sociales en las que albergaron y circularon los videos que produjeron. La acción colectiva juvenil de Escudos Azules confrontó el juvenicidio por medio de prácticas y políticas de la memoria contra-hegemónicas que desplegaron un «pasado-presente movilizado como horizonte de esperanza» (Tischler & Navarro, 2011, p. 73).

Para terminar, es importante señalar que el futuro de Escudos Azules, de la primera línea y de las luchas por la memoria que confrontan el juvenicidio en cada oleada de protesta social son inciertos. No obstante, los ecos que en Colombia ha tenido la historia reciente de revuelta social en Chile permiten vislumbrar surcos de esperanza que no están exentos de grandes desafíos. El estallido social de 2019 en Chile dio lugar a un plebiscito para derogar la Constitución de 1980 y a un proceso de elección de 155 miembros de la Convención Constitucional encargados de redactar la nueva Constitución (Richard, 2021). Más adelante, el inconformismo presente en las calles se canalizó en la elección en marzo de 2021 de Gabriel Boric, exlíder estudiantil quien, además de ser el presidente más joven en la historia de este país, nombró a un gabinete con mayoría de mujeres e impulsa la irrupción de una nueva izquierda con alcance regional que espera enterrar el legado neoliberal y promover la equidad, la defensa del medio ambiente y la agenda feminista (Molina & Montes, 2022).

En Colombia, en las elecciones legislativas de marzo de 2022 el Congreso dio un viraje a la izquierda y el candidato presidencial de este espectro político, Gustavo Petro, junto con su vicepresidenta Francia Márquez, triunfaron en las elecciones presidenciales de mayo de este mismo año y gobernarán el país en el periodo 2022-2026. Pese a ello, esta izquierda progresista se enfrenta, por lo menos, a dos desafíos en relación con los jóvenes: 1) entablar mediaciones táctico-estratégicas entre el *afuera* de la vida social y política de los jóvenes (precarización, exclusión, desencanto radical frente a las instituciones, autonomía social desde las calles) y el *adentro* de la política institucional en donde el desborde utópico que busca cambiarlo todo se estrecha en función de las reglas prefijadas institucionalmente (Richard, 2021); 2) construir puentes entre las grandes preocupa-

ciones de las agendas de gobierno que también inquietan a los jóvenes (que haya más educación, más empleo, más equidad, entre otras) y los anhelos cotidianos y existenciales que, como a Escudos Azules, los llevaron a las calles: que no los estigmaticen, que no los desaparezcan, que no los asesinen y que los juvenicidios no permanezcan en la impunidad.

Referencias

- Aguilar-Forero, N. (2017). Jóvenes, memorias y comunidades emocionales: la experiencia de H.I.J.O.S. y de Contagio en Bogotá, Colombia. *Revista de Estudios Sociales*, (62), 42-53. <https://doi.org/10.7440/res62.2017.05>
- Aguilar-Forero, N. (2020). Las cuatro co de la acción colectiva juvenil: el caso del paro nacional de Colombia (noviembre 2019-enero 2020). *Análisis Político*, 33(98), 26-43. <https://doi.org/10.15446/anpol.v33n98.89408>
- Aguilar-Forero, N. (2021). Sin cuarentena: necropolítica y acción colectiva juvenil en Colombia (2020). *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 19(1), 1-23. <https://doi.org/10.11600/rlicsnj.19.1.4539>
- Amador-Baquiro, J. C. (2021). Estado de excepción en Colombia: una guerra contra la sociedad. *Viva la Ciudadanía*. <https://viva.org.co/cajavirtual/svco728/articulo04.html>
- Amador-Baquiro, J. C., & Muñoz-González, G. (2021). Del alteractivismo al estallido social: acción juvenil colectiva y conectiva (2011 y 2019). *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 19(1), 1-28. <https://doi.org/10.11600/rlicsnj.19.1.4588>
- Arango, P. (2021, 26 de febrero). «No veía nada; había mucha sangre»: Gareth Sella. *El Tiempo*. <https://bit.ly/3R7pN7x>
- Braun, H. (2008). *Mataron a Gaitán*. Aguilar.
- Cárdenas, M. (2021, 21 de mayo). Un cineasta, una artista y un lingüista en la Primera Línea contra el Esmad en Portal Américas. *Las2orillas*. <https://bit.ly/35bzP54>
- Catela, L. (2019). Humanidades, un lugar contra el olvido: etnografía sobre la tradición de las marcas de memoria y la revolución de las palabras en La Plata-Argentina. *Kamchatka. Revista de Análisis Cultural*, (13), 79-9. <https://doi.org/10.7203/KAM.13.12412>
- Comisión de la Verdad. (2018, 16 de octubre). «Queremos una verdad completa y profunda»: madres de víctimas de falsos positivos. *Comisión de la Verdad. Noticias*. <https://bit.ly/3QXu7WY>
- Comisión de la Verdad. (2022). *Hay futuro si hay verdad: informe Final*. <https://bit.ly/3dTw7kJ>

- Comité Nacional de Paro. (2021). *Por la vida, la paz, la democracia y contra la reforma democracia y el paquetazo de Duque vamos al paro nacional el 28 de abril*. <https://bit.ly/3AGSrXu>
- «Con la estigmatización de la protesta social buscan un falso positivo judicial: Escudos Azules». (2021, 9 de mayo). *Verdadabierta.com*. <https://bit.ly/3dUwPhH>
- Decreto 575 de 2021: el gobierno Duque le declara la guerra a la protesta social. (2021, 3 de junio). *Coordinación Colombia Europa Estados Unidos*. <https://bit.ly/3AHrnYb>
- Derecho de petición de Indepaz sobre acciones de Fiscalía y Defensoría por los desaparecidos en el marco del paro nacional. (2021, 26 de mayo). *Indepaz*. <https://bit.ly/3QJcsCo>
- Duzán, M. J. (2020). Masacre de Bogotá. *Semana*. <https://bit.ly/3R43H5D>
- Escudos Azules [@EscudosAzules]. (2021, 7 de mayo). 20 [Tuit]. Twitter. <https://twitter.com/EscudosAzules>
- Escudos Azules [@EscudosAzules]. (2021a, 10 de mayo). [Tuit]. Twitter. <https://twitter.com/EscudosAzules>
- Escudos Azules [@EscudosAzules]. (2021b, 14 de mayo). [Tuit]. Twitter. <https://twitter.com/EscudosAzules>
- Escudos Azules [@EscudosAzules]. (2021c, 14 de mayo). [Tuit]. Twitter. <https://twitter.com/EscudosAzules>
- Escudos Azules [@EscudosAzules]. (2021d, 26 de mayo). [Tuit]. Twitter. <https://twitter.com/EscudosAzules>
- Escudos Azules [@EscudosAzules]. (2021e, 8 de mayo). [Tuit]. Twitter. <https://twitter.com/EscudosAzules>
- Feixa, C. (2021). Generación blockchain: movimientos juveniles en la era de la web semántica. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 19(1), 1-20. <https://doi.org/10.11600/rlcsnj.19.1.4584>
- Feixa, C. Cabasés, M., & Pardell, A. (2015). El juvenicidio moral de los jóvenes... al otro lado del charco. En J. M. Valenzuela (Coord.), *Juvenicidio: Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina y España* (pp. 235-266). NED; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente; El Colegio de la Frontera Norte.
- Forero, S. (2021). Falsos positivos: la cruzada del Ejército contra la campaña, ¿quién dio la orden? *Colombia 2020. El Espectador*. <https://bit.ly/3AhzbhZ>
- Hall, S. (2010). Estudios culturales y sus legados teóricos. En E. Restrepo, C. Walsh, V. Vich (Comps.), *Sin garantías: trayectorias y problemáticas en estudios culturales* (pp. 51-71). Corporación Editora Nacional; Universidad Andina Simón Bolívar; Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar; Instituto de Estudios Peruanos (obra original publicada en 1992).

- Hall, S. (2010). El Espectáculo del «Otro». En E. Restrepo, C. Walsh, V. Vich (Comps.), *Sin garantías: trayectorias y problemáticas en estudios culturales* (pp. 419-446). Corporación Editora Nacional; Universidad Andina Simón Bolívar; Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar; Instituto de Estudios Peruanos (obra original publicada en 1997).
- Jelin, E. (2002). *Los trabajos de la memoria*. Siglo XXI.
- Juris, J. (2007). Practicing militant ethnography with the Movement for Global Resistance (MRG) in Barcelona. En S. Shukaitis, & D. Graeber (Eds.), *Constituent imagination: Militant investigation, collective theorization* (pp. 164-176). AK Press.
- Juris, J., & Khasnabish, A. (2013). *Insurgent encounters: Transnational activism, ethnography, and the political*. Duke University Press.
- Más de 100 detenidos y 20 heridos deja la violencia policial contra movilización del 15 de junio. (2020, 15 de junio). *Contagioradio*. <https://bit.ly/3wpUBbr>
- Mbembe, A. (2011). *Necropolítica*. Melusina
- Medina, M. (2021, 10 de mayo). Antecedentes históricos y posible legado del paro nacional. *Razón Pública*. <https://bit.ly/3KfmrRT>
- Molina, F., & Montes, R. (2022, 11 de marzo). Gabriel Boric asume como nuevo presidente de Chile. *El País*. <https://bit.ly/3CpGaIe>
- Molina, M. E. (2020). Arte urbano, política y memoria en 2019: primeros pasos hacia la conformación de un archivo del muralismo político en Santiago de Chile. *e-Ciencias de la Información*, 10(1), 1-15. <https://doi.org/10.15517/eci.v10i1.37277>
- Morales, L. (2021, 13 de junio). Raúl Carvajal y los falsos positivos: 15 años de lucha sin justicia. *La Oreja Roja*. <https://bit.ly/3AhOTd5>
- Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. (2013). *Paz sin crímenes de Estado: memoria y propuestas de las víctimas*.
- Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. (2020, 25 de febrero). *Mural «¿Quién dio la orden?» ya es patrimonio de la sociedad: Movice*. <https://bit.ly/3pELoZd>
- Muñoz, G. (2015). Juvenicidio en Colombia: crímenes de Estado y prácticas socialmente aceptables. En J. M. Valenzuela (Coord.), *Juvenicidio: Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina y España* (pp. 131-164). NED; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente; El Colegio de la Frontera Norte.
- Osorio, C. (2021, 11 de noviembre). Un mural protegido por la Constitución. *El País*. <https://elpais.com/cultura/2021-11-12/un-mural-protegido-por-la-constitucion.html>
- Perea, C. M. (2009). Colonización en armas y narcotráfico: la violencia en Colombia durante el siglo XX. *Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades*, 11(22), 99-124.

- Ramírez, M. C. (2021, 27 de mayo). La disputa por los discursos en los muros de Medellín. *El Espectador*. <https://bit.ly/3Af69zr>
- Reguillo, R. (2015). La turbulencia en el paisaje: de jóvenes, necropolítica y 43 esperanzas. En J. M. Valenzuela (Coord.), *Juvenicidio: Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina y España* (pp. 59-78). NED; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente; El Colegio de la Frontera Norte.
- Reguillo, R. (2017). *Paisajes insurrectos: jóvenes, redes y revueltas en el otoño civilizatorio*. NED; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.
- Restrepo, E. (2016). *Etnografía: alcances, técnicas y éticas*. Envió Editores.
- Richard, N. (2021). *Revolución social y nueva constitución*. Clacso.
- Rivera-Aguilera, G., Imas, M., & Jiménez-Díaz, L. (2021). Jóvenes, multitud y estallido social en Chile. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 19(2), 1-23. <https://doi.org/10.11600/rlcsnj.19.2.4543>
- Santos, B. (2020). *La cruel pedagogía del virus*. Clacso.
- Temblores ONG. (2021). *Reporte sobre los hechos de violencia policial ocurridos durante el 2021*. <https://bit.ly/3wtplbF>
- Tischler, S. (2010). La memoria ve hacia delante: a propósito de Walter Benjamin y las nuevas rebeldías sociales. *Constelaciones. Revista de Teoría Crítica*, 2, 38-60.
- Tischler, S., & Navarro, M. (2011). Tiempo y memoria en las luchas socioambientales en México. *Desacatos*, (37), 67-80. <https://doi.org/10.29340/37.288>
- Valenzuela, J. M. (2015). Remolinos de viento: juvenicidio e identidades desacreditadas. En J. M. Valenzuela (Coord.), *Juvenicidio: Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina y España* (pp. 15-58). NED; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente; El Colegio de la Frontera Norte.